

tema del mes

La universidad española ante el proceso de Bolonia

Amenaza a la universidad pública

Albert Claret
Associació d'Estudiants Progressistes

Con el affaire Bolonia ha acabado pasando aquello que no queríamos que pasara. Y es que ahora se oye hablar mucho del proceso de Bolonia y de la reforma universitaria, pero el centro del debate se ha desplazado hacia cuestiones laterales que obvian el fondo de la cuestión. Hay quien tiene interés en explicar la oposición estudiantil a la totalidad o a una parte de la reforma en un sentido puramente anecdótico y con regusto de crónica de juventud

TAMBIÉN están los opinadores mediáticos y “pensadores” amigos de la patronal que elaboran estudios y firman artículos que alimentan una campaña de desgaste de la universidad pública sin precedentes.

Pero situémonos. El contexto internacional con el que convivimos, en una época de máxima expansión de los postulados neoliberales y de las políticas privatizadoras, condiciona un marco político de referencia en el que hay que moverse con mucha precaución.

Como en todo proceso de reforma, a menudo el peligro no es el texto que hay encima de la mesa sino las pugnas que se suceden debajo de esta. Es evidente que la página y media de la Declaración de Bolonia no es en sí misma una declaración de guerra –solamente habla de la homologación de títulos a escala europea–, pero algunas de las tensiones y de los intereses que hay detrás del discurso entorno al futuro de la universidad sí que implican una seria amenaza.

Las inquietantes intenciones plasmadas en los informes de los círculos empresariales en lo que atañe a la orientación de los estudios superiores hacia las necesidades del mercado, la tendencia manifiesta del Gobierno a aumentar la proporción de préstamos bancarios en detrimento de las becas públicas en el total de ayudas al estudio o las múltiples ofensivas desde diarios y medios conservadores que apuntan a una supuesta mala gestión de un sistema universitario caracterizado como arcaico y deficitario, son algunos síntomas que nos dan la prueba evidente de que la encrucijada en que se encuentra la universidad pública no es solo una cuestión de equiparación de títulos de estudio para hacerlos más europeos.

El centro del debate que se ha abierto con el llamado proceso de Bolonia bascula en torno a la autonomía universitaria, aquel imperativo constitucional que ya en el pasado motivó grandes movilizaciones y luchas y que ahora corre el grave peligro de oscilar hacia una sinonimia con los conceptos neoliberales de flexibilidad y desregularización, aplicados tan eficientemente a muchos otros campos de la gestión anteriormente pública.

Ante las partidas presupuestarias aún muy insuficientes para las necesidades de las universidades y para garantizar el acceso universal del alumnado, y partiendo de la situación de descrédito y burla reiterada que sufren los órganos de gobierno y decisión colegiados (especial mención merecen los claustros), es preciso que el conjunto de las fuerzas progresistas entiendan que sin autonomía económica –es decir, financiación suficiente– y autonomía democrática –es decir, funcionamiento regular de los espacios internos- nos veremos abocados a una situación de precariedad y mediocridad del sistema público universitario, en favor de la emergencia largamente esperada de los centros privados, que ya se están frotando las manos.

Hablando en plata, tenemos que evitar caer en reduccionismos inservibles: la cuestión no es ni ha sido nunca la Declaración de Bolonia, sino los intereses de algunos de asaltar el sistema universitario público a cualquier precio. Pero la partida es larga, y todavía no se ha dicho la última palabra.